

Expediente: 3158/09  
Carátula: FIGUEROA LUISA ISABEL C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ORDINARIO (RESIDUAL)  
Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 1  
Tipo Actuación: FONDO (ANTERIOR REF. LEY 8988 INST. UNICA)

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 1

ACTUACIONES N°: 3158/09



H103214026929

**JUICIO: "FIGUEROA LUISA ISABEL c/ PROVINCIA ART S.A. s/ ORDINARIO (RESIDUAL)"  
EXPTE. N° 3158/09**

**San Miguel de Tucumán, octubre de 2022.**

**AUTOS Y VISTOS:** Lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en sentencia casatoria N° 502 de fecha 14/08/2020 que glosa a fs. 811/814, en cuanto casa la Sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, en fecha 11/04/2018 (fs. 752/755), con los alcances considerados en el punto 5 y en base a la doctrina legal allí expresada, debiéndose dictar la correspondiente sustitutiva. Queremitadas las actuaciones a esta Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, habiéndose integrado la misma, se llaman los autos para resolver; y

### **R E S U L T A:**

Que a fs. 752/755 glosa la sentencia N° 67 de fecha 11/04/2018 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo, que resuelve en Instancia Unica: *"I) ADMITIR LA DEFENSA DE FALTA DE ACCIÓN promovida por PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO SA y en consecuencia RECHAZAR la demanda promovida por LUISA ISABEL FIGUEROA, argentina, mayor de edad, casada, DNI N° 12.247.778, con domicilio en calle Corrientes, Mz. F, lote 18, del B° Aeropuerto de esta ciudad, y por ello ABSOLVER a la demandada de la acción entablada contra ésta, atento lo considerado. II) DECLARAR INOFICIOSO el tratamiento de las inconstitucionalidades de los Arts. 1, 8, 21, 22 y 39 inciso 1 LRT y Decretos 717/96 y 491/97, atento lo considerado. III) COSTAS, a la parte actora vencida, por lo tratado"*

Que a fs. 765/777 la parte actora interpone recurso de casación en contra de tal pronunciamiento, el que es concedido por la Sala IIIa. de esta Cámara a fs. 800 por sentencia de fecha 16/09/2019.

Que a fs. 811/814 glosa sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia que hace lugar al recurso de casación deducido por la actora en contra de la sentencia de esta Cámara y casa INTEGRAMENTE la misma en base a la siguiente doctrina legal: ***"Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que sin fundamentos suficientes se aparta del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Corte en materia de responsabilidad civil de las aseguradoras de riesgos del trabajo"***, disponiendo Reenviar los autos a la Cámara del Trabajo a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

En ese estado previa intervención de mesa de entrada civil se asigna a la Sala I de esta Cámara como Tribunal encargado del dictado de nuevo pronunciamiento, ello al estar del sorteo del 13/09/2021.

Radicados los autos en la Sala I, por providencia del 20/09/2021 se integra con los vocales María del Carmen Domínguez y Rogelio Andrés Mercado, como vocal preopinante y vocal segundo respectivamente. Producido el fallecimiento del vocal segundo, se procede a una nueva integración

conforme Acordada 462/22 con la vocal Marcela Beatriz Tejeda como vocal segunda, conforme decreto del 03/05/2022, el que notificado y firme, y previos tramites de ley, deja la causa en estado del dictado de sentencia.

## **C O N S I D E R A N D O:**

### **VOTO DE LA VOCAL PREOPINANTE MARIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ:**

#### **I. La Litis.**

A fs.2/18, se apersona la letrada Noelia Grisel Medina Nuñez en representación de LUISA ISABEL FIGUEROA, y promueve demanda contra PROVINCIA ART S.A., por el cobro de la suma de \$290.391,34 (pesos doscientos noventa mil trescientos noventa y uno con treinta y cuatro centavos), o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos, con más sus intereses, gastos y costas por los conceptos de lucro cesante, daño material, daño moral y pérdida de chance.

Relata que ingresó a trabajar para la Universidad Nacional de Tucumán el 01/10/2007 como personal permanente en la categoría de “maestranza-005” en la sede de la Facultad de Arte y en la Escuela de Arte, realizando turnos fijos de 7 a 13 hs.; describe sus tareas como de limpieza de aulas y pasillos, cafetín, y demás dependencias del establecimiento, servicio de cafetería para docentes y algunas tareas a pedido de: ordenar papeles y archivos, etc. Sobre el infortunio laboral refiere que el 07/03/2008 a horas 11:00 aproximadamente, efectuaba tareas de limpieza de la escalera que va al primer piso de la Escuela de Arte, se resbaló en dicha escalera provocándole varias lesiones meniscales en la rodilla izquierda, con importantes secuelas (lesión o ruptura meniscal interna izquierda), lo que le provocara una incapacidad permanente, parcial y definitiva de un 20% como surge del informe técnico pericial del 21/09/2009 emitido por el Dr. David Safe e informes médicos de Gamma Nuclear del 05/04/2008 y 15/09/2008.

Relata también que al momento del infortunio fue socorrida por compañeros de trabajo quienes le colabora para dirigirse al Sanatorio 9 de Julio donde le brindan los primeros auxilios e indican rehabilitación. Posteriormente es derivada al Sanatorio del Norte donde le prescriben rehabilitación como fisioterapia las cuales son prestadas en Cerenoa, destacando que éstos tres mencionados son prestadores de la ART. Acompaña 17 prescripciones médicas.

Afirma que efectuó consulta médica particular con el Dr. Pablo Maldonado del Instituto Campbell a través de su obra social “ASUNT” por la insuficiencia y deficiencia de los servicios brindados a través de la ART. Asevera que pese a ello mantuvo contacto con la ART (que registrara su siniestro como n°841357) quien la intimara a revisión medica a las cuales dice haber concurrido sin recibir servicios médicos adecuados y oportunos: Según surgiría de telegramas cursados en fechas 31-06, 23-07 y 13-12 todos del 2008 la ART intimó a la actora a presentarse para control de prestaciones.

Advierte que debió intimar a la ART a que le brindara servicios médicos de traumatología así como la intervención quirúrgica y se solicita Junta Médica por el siniestro laboral, destacando que estos requerimientos nunca fueron atendidos ni contestados según prueba con telegrama del 09/03/2009, afirma. Que finalmente examinada por los prestadores de la demandada estos determinaron que estaba en condiciones devolver a su trabajo (receta medica del 05/01/2009 de Sanatorio Norte SRL) otorgándole alta medica.

Expone que a esa altura su mandante no se encontraba en condiciones de ser dada de alta, continuando en tratamiento particular con el Dr. Maldonado quien recomendaba intervención quirúrgica, la que se practicara el 16/03/2009 en Sanatorio Luz Médica, a través de su obra social ASUNT, debiendo hacerse cargo de todos los gastos médicos como lo acredita la documentación adjuntada y que menciona en su escrito.

Afirma que tras el siniestro sufrió diversas lesiones, daños corporales y psicológicos conforme demuestra el informe técnico pericial del 21/09/2009 emitido por el Dr. David Sale, desconociendo los dictámenes médicos de la Comisión Médica y Comisión Médica Central.

Luego relata que si bien la ART reconoce el siniestro laboral pero no reconoce el resarcimiento por el daño que este le produjera.

Sostiene que la ART demandada ha incumplido las normas de Seguridad e Higiene del Trabajo (Leyes 19587 y 24.55/) lo que le causó graves daños, omitiendo controlar y verificar que el empleador implementara acciones concretas a fin de evitar infortunios laborales, refiriendo los puntos del plan de

acción concreto que entiende ha incumplido la ART. Refiere a la normativa específica que entiende incumplida y sostiene que la normativa civil (arts. 113, 1109, y ccdantes.) sostiene su reclamo por omisión de diligencias exigibles por lo que debe responder extracontractualmente, en especial el incumplimiento al deber de prevención, seguridad y vigilancia que ordena el art. 4 LRT, que hace extensiva la condena solidaria con fundamento en el art.1074 c. civil junto con el marco legal antes mencionado, concluyendo que la Art incurrió en clara conducta culposa (art. 512 c. civil) de la que debe responder. Cita doctrina y jurisprudencia que doy por reproducida.

Luego refiere a los factores de atribución de responsabilidad reiterando conceptos ya volcados en el capítulo anterior, normativas y doctrinas que considera aplicables.

En cuanto a las consecuencias dañosas, menciona que acredita el daño causado en especial con el dictamen médico e informe pericial del 21/9/2009 del Dr. David Safe y documentación del Dr. Pablo Maldonado que acreditan que la actora padeció “ruptura de menisco izquierdo con limitaciones funcionales de la flexión 110°”, por la que fue intervenida quirúrgicamente (menisectomía) el 16/03/2009 en Sanatorio Luz Medica, provocándole una incapacidad PPyD del 20% sujeta a las probanzas de autos y prueba a producirse. Refiere que padeció largos y tediosos tratamientos, y destaca que aun padece importantes dificultades en la realización de tareas habituales por su minusvalía psico-física, agregado que se vio alterada su integridad emocional y psíquica. Relata sus secuelas permanentes morfológicas, anatómicas, funcionales y socio económicas así como en la parte psicológica por el grado de depresión y vergüenza que padece, entre otros que señala. Aporta las limitaciones que dice padecer y efectúa finalmente la valoración de estos daños considerando la edad de la damnificada a la fecha del hecho (52 años), la remuneración de \$2.728,54 (agrega que se debe actualizar el salario según su categoría y escala salarial), las dolencias y perdidas de capacidad-ganancias, lesión estética, otros daños y finalmente el daño moral efectuando su cálculo con un estimado de vida útil de 75 años. Así reclama por daño material la suma de \$35.000, por daños moral la suma de \$51.078,27, por pérdida de chance la suma de \$34.052,18 y finalmente el lucro cesante por \$170.260,90, lo cual totaliza la suma de \$290.391,34 que reclama.

Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, 46 LRT y decretos 717/96 y Dec. 491/97; también del art. 1 y 39 inc. 1 de la Ley 24.557 sobre cuyos argumentos volveré al tratar las mismas, cita numerosa doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso.

Cita el derecho y detalla la abundante documental que acompaña, haciendo reserva del caso federal y peticionando se haga lugar a la demanda.

A fs. 87/89 se agrega escrito con detalle de la documentación que acompaña.

A fs. 93, obra sentencia N° 238 del 5/7/2010 que declara la inconstitucionalidad del Art. 46 de la Ley 24.557.

Corrido traslado de la demanda a fs.188/201, se apersona la letrada Silvia Marcela Meneghello, apoderada de la demandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima. Plantea defensa de excepción de falta de legitimación activa y pasiva. Subsidiariamente, contesta demanda y solicita su rechazo con costas. Luego de negar en general y en particular los hechos invocados por la actora y contesta los planteos de inconstitucionalidad deducidos por ésta, da su versión de los mismos.

Reconoce expresamente que su representada, en los términos del art. 27 de la Ley 24557, oportunamente, suscribió con la empleadora UNT n°79014, contrato modelo de afiliación con vigencia desde el 30/06/2001 hasta la actualidad; contrato de afiliación a través del cual las partes contratantes se sometieron a las disposiciones de la Ley 24.557 y sus reglamentaciones. Por ello entiende que no puede existir responsabilidad de su mandante frente a obligaciones diferentes de las establecidas en la LRT con sus alcances y modalidades porque no existe causa válida de atribución de esa responsabilidad.

Aduce que el contrato en cuestión corresponde al texto tipo, provisto por la Res. 39/96 SRT mediante el cual las obligaciones de su mandante se limitan a otorgar las prestaciones de la LRT conforme los supuestos contemplados y de acuerdo a sus condiciones. Entiende que por ese motivo resulta fundamental puntualizar desde este momento el alcance de la responsabilidad de su mandante derivada del contrato de afiliación suscripto, y cuya extensión no puede ir más allá del deber de otorgar las prestaciones de la Ley 24557 (y no de otras), de acuerdo a las modalidades y condiciones establecidas en dicha normativa y las dictadas en consecuencia, conforme el texto del acuerdo de cesión de cartera celebrado y su inicio de vigencia respecto de cada uno de los terceros involucrados.

Por este motivo, deduce defensa de falta de legitimación pasiva fundada en la inexistencia absoluta de cobertura para el reclamo impetrado, toda vez que el contrato de afiliación celebrado solo preveía el otorgamiento de las prestaciones de la LRT y el sometimiento a sus disposiciones.

Señala que su poderdante otorgó cobertura asegurativa a aquellas contingencias previstas por la ley 24557 es decir accidentes y enfermedades laborales enumerados en el art. 6 de dicha ley, ya que son esos riesgos por los cuales la afiliada ha abonado la alícuota fijada en el contrato de afiliación y no otros. Sin embargo destaca, la actora pretende el pago de \$290.391,34 cuando ello deviene absolutamente improcedente y carece de sustento legal ya que excede las previsiones de la ley citada. Reitera que no puede existir responsabilidad de su mandante frente a obligaciones diferentes que van más allá de las establecidas en la LRT con sus alcances y modalidades, porque no existe causa válida de atribución de esa responsabilidad. Cita doctrina y jurisprudencia que doy por reproducidas, dejando planteada la falta de legitimación activa y pasiva, la que no se fundamenta - aclara- en la caducidad del seguro sino simplemente en la inexistencia de cobertura alguna para el reclamo de autos al encontrarse excluida de ella la acción del derecho común..

Refiere que su mandante no es responsable del control de Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo, función que especialmente reserva la Ley 24557 para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Indica que el art. 4 de la LRT y disposiciones concordantes establece una carga para las ART respecto de los Planes de Mejoramiento y obligación de denunciar incumplimientos relevados. Más allá de este cumplimiento cabal por parte de Provincia ART SA, destaca que el sujeto activo de esta obligación es la propia SRT y no el trabajador con quien su mandante no asumió obligación alguna en la materia. Entiende que las consideraciones que efectúa -y fallos citados- sustentan la excepción de falta de legitimación pasiva para ser demandada con base en obligaciones derivadas del art. 4 y concordantes de la Ley 24557. Introduce el Caso Federal.

Rechaza los planteos de inconstitucionalidad formulados por la demandante aun cuando -sostiene- el argumento central de la defensa radica en la abstracción de dichos planteos. Propone la doctrina de los actos propios. Defiende la constitucionalidad de los arts. 39 y 49 y disposiciones adicionales 3 y 5 de la Ley 24557.

Subsidiariamente contesta la demanda incoada, desconociendo en forma genérica todos los dichos del accionante que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte por no constarle y ser tercero a la relación laboral entablada entre la actora y la UNT. Formula la negativa en particular de los hechos relatados e impugna la liquidación presentada en su totalidad.

Solicita la aplicación de las leyes 24307, 24432 y dec. 1813/92 y fallos de actualidad en materia de honorarios.

Efectúa reserva del caso federal y también reserva de accionar contra la UNT por los montos que tuviera que erogar por esta acción. Solicita el rechazo de la demanda con costas. Adjunta la documentación que pretende hacer valer (fs. 202).

A fs. 206/207, la actora contesta las excepciones interpuestas en el responde y solicita su rechazo, lo que el juez a-quo deriva para definitiva a fs. 208.

A fs. 226/232, el perito médico oficial, Adrián Cunio, presenta su dictamen pericial, en los términos el Art. 70 Ley 6.204, el que concluye que la actora presenta “secuela de traumatismo de rodilla izquierda” que le produce una ILPP del 4,9%.

A fs. 236 la causa es abierta a prueba al sólo fin de su ofrecimiento. A fs.240, el actor solicita la audiencia del art.69 del CPL, la que tiene lugar con las modificaciones introducidas por la Ley 7.293. A fs.247, obra acta de audiencia convocada en la que consta que no se arriba a una conciliación de intereses entre las partes, por lo que se dispuso proveer las pruebas oportunamente ofrecidas.

A fs.709, secretaría actuaria informa sobre la actividad probatoria desplegada por las partes. A fs.712/717 y 719/726, corren agregados los alegatos presentados en término por la parte actora y demandada, respectivamente.

A fs. 727, se dispuso elevar los autos para el dictado de sentencia de instancia única.

A fs. 746, obra dictamen de Fiscalía de Cámara sobre los planteos de inconstitucionalidad, interpuestos en la demandada.

Que dictada sentencia por la Sala III° de la Excma. Cámara del Trabajo, esta es casada íntegramente por sentencia de la CSJT del 14/08/2020, y asignada a esta Sala I por Reenvío, previos trámites de ley se avoca al estudio y resolución de la presente.

II. Llegan como hechos no controvertidos: 1) la existencia del contrato de afiliación N° 79014 entre Provincia ART SA y la Universidad Nacional de Tucumán vigente desde el 30/6/2001 en adelante; 2) carácter de empleador la Universidad Nacional de Tucumán de la actora Luisa Isabel Figueroa; 3) el accidente de trabajo sufrido por la actora el 7/3/2008.

Resulta de esto que las cuestiones litigiosas que serán motivo de sentencia son: 1) excepción de falta de acción por falta de legitimación pasiva/activa deducida por Provincia ART SA; 2) inconstitucionalidad de los Arts. 1, 8, 21, 22 y 39 inciso 1 de la LRT y los Dtos. 717/96 y 491/97; 3) responsabilidad civil de la demandada; 4) rubros e importes reclamados. 5) costas, intereses, honorarios

En el orden propuesto se ingresará al tratamiento de las mismas, a la luz de lo prescripto por los arts. 32, 33, 40, 308 y cc. del CPC y C (de aplicación supletoria en el fuero laboral), conforme los hechos que quedaran determinados en la traba de la litis, documentación agregada, y demás probanzas de autos cuya plataforma probatoria es la siguiente:

- Pericia médica previa: a fs. 227/232 corre glosado dictamen del Perito Médico Oficial Adrian Cunio, según el cual luego de analizar a la actoras y efectuados exámenes complementarios, concluye que la actora Luisa Isabel Figueroa presenta al momento del examen físico (28/09/2011) SECUELA DE TRAUMATISMO DE RODILLA IZQUIERDA que el produce una incapacidad parcial y permanente (ILPP) del 4,9%. Corrida vistas, el dictamen no fue observado ni impugnado.

Pruebas de la actora:

- Instrumental (fs. 250/251): prueba documental agregada con la demanda con escrito de fs. 87/88 según cargo de fs. 89.

- Exhibición (fs. 254/255) : se agregan por esta vía: Historia Clínica n° 268718 de Luisa I. Figueroa de Traumatología del Norte- Sanatorio del Norte (por traumatismo de rodilla izquierda, operada de fractura de muñeca); Correo Argentino (fs. 291) se expide sobre la autenticidad de los TCL del 09/03/2009 por el cual la actora solicita Junta Médica a la CMT y a la ART; Sanatorio 9 de Julio (fs. 298) remitiendo comprobantes de gastos de prestaciones médicas y farmacéuticas los que fueran abonadas por Provincia ART SA como accidente de trabajo; Centro de Rehabilitación del NOA SRL (Ce.Re.Noa) adjuntando historia clínica n° 12247778 (fs. 306) de Luisa Figueroa (traumatismo de rodilla izquierda); Secretaria de Estado del Trabajo (fs. 321/326) quien informa que la UNT (Fac. de Artes) y Provincia ART no presentan denuncias por incumplimiento a las normas de higiene y seguridad del trabajo entre 07/03/07 al 07/03/08, aclarando que las denuncias a la ART no se efectúan en el ámbito de la SET sino de la SRT.

- Absolución de posiciones (fs. 328), citado el representante legal de Provincia ART (cedula de fs. 336), no comparece, procediéndose a la apertura del sobre con el pliego de posiciones (agregado a fs. 341)

- Pericia Psico- Social (fs. 343): la perito designada Lic. Maria Edith Martinez presenta dictamen a fs. 377/380 y tras explicitar las técnicas utilizadas, expone sobre las secuelas del accidente laboral del 07/03/2008 sufrido por la trabajadora y tras concluir que padece “estrés postraumático crónico leve”, estima su incapacidad en un 15% según el baremo civil de Altube-Rinaldi y recomienda inicio de tratamiento psicoterapéutico. Corrida vistas, la demandada propone aclaraciones, las que fueron respondidas por la perito a fs. 389, ratificando su informe, y corrida vista no es impugnado por la accionada.

- Perica médica (fs. 393): designado el perito médico Sebastian Area, solicita dictamen psicológico agregado a fs. 462/463 y presenta pericia médica a fs. 469/470, donde concluye según cuestionario de la oferente que presenta traumatismo de rodilla izquierda, que fue sometida a tratamiento quirúrgico y que no hay daño psíquico, determinando una incapacidad parcial y permanente del 5.4% conforme Baremo de la ley 24557 y Dec. Reglamentario. Este dictamen no fue observado ni impugnado por las partes.

- Testimonial (fs. 474): no producida.

- Informativa (fs. 503/504): no admitida (sentencia 06/03/2013).

- Informativa (fs. 517/518): remite la UNT legajo del siniestro laboral del 07/03/2008 sufrido por la actora, desde fs. 547 bis/577

Pruebas de la demandada:

- Instrumental (fs. 582): ofrece constancias, documentación adjuntada y pericia medica del Dr. Cunio en cuanto le resulten favorables.

- Informativa (fs. 585): se agregan informes de: UNT (fs. 591bis/620) acompaña legajo laboral de la actora; AFIP (fs. 624/643) adjunta reflejo de datos registrados y planilla de aportes y contribuciones de la actora Figueroa efectuados por I UNT desde el 07/1994 a 12/2012.

- Absolución de posiciones (fs. 645): no comparece la actora, procediéndose a la apertura del sobre con el pliego de posiciones agregado a fs. 688.

- Pericial contable (fs. 690): no se produjo.

No existen otras pruebas aportadas por las partes.

**III. La inconstitucionalidad de los Arts. 1, 8, 21, 22 y 39 inciso 1 de la LRT, y los Dec. 717/96 y 491/97.**

Atento que estos planteos actorales, oportunamente sustanciados y con dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara (fs. 746/747) no han sido resueltos, corresponde su tratamiento y resolución.

a) *La Inconstitucionalidad del Art. 1 de la Ley 24.557*: Respecto del art. 1 de la LRT, cabe señalar que conforme el precedente de la Corte en “Castillo”, las Comisiones Médicas revisten carácter federal (máxime cuando las comisiones mencionadas son “organismos de orden federal” (Fallos 322:1220, “considerando 2”), razón por lo cual resulta contradictorio otorgarle carácter de tribunal administrativo de primera instancia, ya que si ello fuera así, necesariamente debería recurrirse ante la instancia federal, lo que fuera expresamente descalificado por nuestro máximo Tribunal Nacional. La actuación de la Comisión Médica, “organismo de orden federal” solo provee una decisión médica cuyo propósito es activar el sistema en aras a beneficiar a las víctimas de siniestros laborales ya que esa es la única razón que debería motivar al sistema creado, al menos conforme al discurso explícito de sus instrumentadores y defensores. Y cómo se benefician las víctimas: obteniendo lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado de manera contundente en la causa “Aquino”, al expresar: *“En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidas por la LRT”. Los reiterados pronunciamientos en el país han considerado que sin perjuicio de destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Castillo” (Fallo en extenso: el Dial - AA23AE) se limitó a declarar la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1 de la ley 24.557, los fundamentos allí expuestos por nuestro más Alto Tribunal constituyen pautas orientadoras para dilucidar la constitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley citada, de las normas pertinentes del dec. 717/96 y de la res. S.R.T. 45/97.”* (SD. 70573 - “González, Protacio c/ Berkley International Art S.A. s/ Accidente - Acción Civil” - CNTRAB - SALA V - 31/03/2008, entre otros), y que la doctrina de este precedente *“constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los arts. 21, 22, 46, inc. 1, y de las normas pertinentes del dec. 717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias.”*-

No cabe duda que las normas que regulan el procedimiento por ante las comisiones médicas son incompatibles con el principio del debido proceso y como lo destaca el fallo citado con el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -norma de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.)- por la cual *“toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones. El derecho a ser oído con justicia sólo puede ser garantizado por personas que hayan prestado juramento de respetar la legalidad constitucional e infraconstitucional, condición que no reúnen los médicos, quienes sólo están obligados por el juramento hipocrático.”*-

Por lo expresado cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 1 Ley 24557 formulado por la parte actora en su escrito de demanda.- Así lo declaro.

b) *Inconstitucionalidad de los Arts. 8, 21 y 22 Ley 24557*: planteada por la actora, y avalada dicha declaración por el Dictamen Fiscal de fs. 746, es compartida por esta Vocalía.

Esta Vocalía, en reiteradas ocasiones ha sostenido lo siguiente: “En virtud de los arts. 116, 121 y 75 inc. 12 de la CN, la organización de la administración provincial y su régimen procesal es facultad no delegada por las provincias, por lo que las normas que en sentido contrario tiene la LRT colisiona con las normas señaladas al atribuir competencia federal (administrativas o Judicial) a conflictos comunes entre trabajadores y empleadores, dejando de lado a los integrantes del Poder Judicial de las provincias. (Forconi, José Alberto c/ La Segunda ART SA s/inconstitucionalidad” Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Circunscripción 1, Sala 2, 17/9/03, el dial, MZ3CBA).

Los arts. 8, 21 y 22 de la ley 24.557 otorgan a las Comisiones Médicas funciones jurisdiccionales, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y pretenden excluir a los jueces del conocimiento de demandas que constituyen materia de su conocimiento y sustituirlos por Comisiones Médicas. De ese modo violan en sistema Constitucional, en tanto importan sustraer del ámbito del Poder Judicial la resolución de los conflictos individuales de derecho, con las garantías constitucionales que ello implica, y someterlo a la jurisdicción administrativa.

Cabe agregar que otorgar a las Comisiones Médicas funciones jurisdiccionales, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad, implica excluir a los jueces del conocimiento de demandas que constituyen materia de su conocimiento y sustituirlos por Comisiones Médicas, violan en sistema Constitucional, pues importa sustraer del ámbito del Poder Judicial la Resolución de los conflictos individuales de derecho, con las garantías constitucionales que ello implica, y someterlo a la jurisdicción administrativa. En efecto, diversos Tribunales de la República han declarado la inconstitucionalidad de la normativa impugnada: “Los Arts. 21, 22 (entre otros) de la LRT, al establecer la obligatoriedad de una instancia previa, constituida por la intervención de la autoridad de aplicación en materia laboral, impiden al trabajador ocurrir ante el órgano pertinente para exigir la reparación de los infortunios, restringiendo el acceso a la Justicia, del Trabajo, como jueces naturales mediante el debido proceso, deben declararse inconstitucionales por afectar los arts. 5, 17, 18 y 109 de la Constitución Nacional“. (TRAB. 1º, Necochea (Buenos Aires)- 30.4.1998, Arias Jorge A. C/ SAFICOGA. YySS. 1999-437. “La atribución de competencia federal a los recursos contra la resolución de las comisiones médicas provinciales importa un avance sobre las jurisdicciones locales, vedada por el Art. 75 inc. 12 de nuestra Carta Magna” (J.Fed. Iº Inst., Río Cuarto, Cba., agosto 24, 1993, “Cabrera, Diego R. c/Omega ART s/ Indemnización Ley 24557”).

No cabe duda que las normas que regulan el procedimiento por ante las comisiones médicas son incompatibles con el principio del debido proceso y con el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -norma de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) por la cual *“toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones. El derecho a ser oído con justicia sólo puede ser garantizado por personas que hayan prestado juramento de respetar la legalidad constitucional e infraconstitucional, condición que no reúnen los médicos, quienes sólo están obligados por el juramento hipocrático”*.

Tratándose de un tema sobre el que existe basta y conste opinión doctrinaria y jurisprudencial, ante la negativa expresa de la ART de proporcionar la cobertura indemnizatoria tarifada, y como enseña Horacio Shick: *“Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Castillo”, “Venialgo” y “Marcheti”, que constituyen un conjunto armónico que determina la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 inc. 1 de la Ley 24.557 y de las normas correspondientes del decreto PEN 717/96. En consecuencia, surge como doctrina de aplicación para todos los tribunales del país, que las comisiones médicas creadas por la LRT, al constituir organismos de carácter federal, son*

*inconstitucionales y los trabajadores pueden concurrir directamente ante los tribunales del Trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias de la LRT, sin tener que atravesar el laberíntico procedimiento ante las comisiones médicas. Las pretensiones deberán formularse de acuerdo con las normas procesales de cada jurisdicción y no por medio del diseño establecido por el decreto 717/96 y normas complementarias. Estos fallos determinan una instancia superadora de la notable desigualdad sufrida por los trabajadores que debían presentarse solos, sin defensa letrada, enfrentando las estructuras de de las compañías aseguradoras y sometiendo a la decisión de las cuestionadas comisiones médicas”. Por lo tanto el trabajador puede optar por recurrir directamente a la justicia, sin ninguna otra intervención, para obtener las prestaciones que a su entender le corresponden” (Horacio Schik “Riesgos del Trabajo - Temas Fundamentales” pgs. 429/431)”.*

En base a lo expuesto, se declara la inconstitucionalidad de los Arts. 21 y 22 LRT, que obstruyen el derecho del trabajador de recurrir a los Tribunales locales en pos de salvaguardar sus derechos a la luz de los reclamos que se impetren por accidentes de trabajo. Así lo declaro.

*c) La Inconstitucionalidad del Art. 39 inc. 1 de la LRT:* La parte actora, en su escrito de demanda, refiere que con esta norma se cercenan los derechos del trabajador al reclamar la reparación de su incapacidad laboral con sustento en las normas de derecho común, refiriendo que con la norma que se ataca de inconstitucional se afecta la regla del debido proceso judicial y el legítimo derecho de defensa en juicio.

La parte empleadora demandada, en su responde, sostiene que el art. en cuestión ha sido dictado conforme a las facultades constitucionales del Congreso, y los beneficios de un sistema de seguridad social por sus características tienen una prestación directa dineraria y un conjunto de prestaciones sociales en especie que persigue la cobertura de todo daño causado al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

En lo que hace al planteo de inconstitucionalidad de la norma en cuestión, no es vano recordar que la descalificación de una ley con base constitucional ha de reputarse como la “última ratio” del orden jurídico, o sea cuando a través del mecanismo utilizado resulta probada la configuración de una supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, admitiéndose la inconstitucionalidad de normas que (aunque no resulten ostensiblemente incorrectas) devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna (cfr. CS, Fallos: 301:3 19, conc. 6° y art. 17 CN) .

Considero apropiado dejar aclarado que para decidir la cuestión en análisis, se torna necesario seguir los lineamientos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A.” del 21/09/04 en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, a los que me remito en honor a la brevedad y en el que concluyó que el art. 39 de la ley 24.557 es inconstitucional en cuanto impide al trabajador acceder a una indemnización que contemple la reparación integral del perjuicio sufrido.

Que cabe agregar que el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo se aparta de la concepción reparadora integral pues no admite la indemnización que no sea la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida. De tal forma la norma citada al excluir, sin reemplazar con análogos alcances, la tutela de los arts. 1.109 y 1.113 del C.C. ha vulnerado el art. 14 bis y otras normas internacionales de jerarquía constitucional y no ha tendido a la realización de la justicia social, antes bien, ha marchado en sentido opuesto, al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo.

Que por lo expuesto y considerando que la norma cuya validez constitucional se cuestiona, constituye una clara discriminación “peyorativa” de los trabajadores por su sola condición de tales, violando así



el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de nuestra Carta Magna, concluyó en que corresponde hacer lugar a la tacha de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la LRT.

d) Respecto de los arts. 1 y 8 de la LRT, del Dec. 717/96 y Dec. 491/97: cabe señalar que conforme el precedente de la Corte en “Castillo”, las Comisiones Médicas revisten carácter federal (máxime cuando las comisiones mencionadas son “organismos de orden federal” (Fallos 322:1220, “considerando 2”), razón por lo cual resulta contradictorio otorgarle carácter de tribunal administrativo de primera instancia, ya que si ello fuera así, necesariamente debería recurrirse ante la instancia federal, lo que fuera expresamente descalificado por nuestro máximo Tribunal Nacional. La actuación de la Comisión Médica, “organismo de orden federal” solo provee una decisión médica cuyo propósito es activar el sistema en aras a beneficiar a las víctimas de siniestros laborales ya que esa es la única razón que debería motivar al sistema creado, al menos conforme al discurso explícito de sus instrumentadores y defensores. Y cómo se benefician las víctimas: obteniendo lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado de manera contundente en la causa “Aquino”, al expresar: “En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidas por la LRT”. Los reiterados pronunciamientos en el país han considerado que sin perjuicio de destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Castillo” [Fallo en extenso: el Dial - AA23AE] se limitó a declarar la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1 de la ley 24.557, los fundamentos allí expuestos por nuestro más Alto Tribunal constituyen pautas orientadoras para dilucidar la constitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley citada, de las normas pertinentes del dec. 717/96 y de la res. S.R.T. 45/97.” (SD. 70573 - “González, Protacio c/ Berkley International Art S.A. s/ Accidente - Acción Civil” - CNTRAB - SALA V - 31/03/2008, entre otros), y que la doctrina de este precedente “constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los arts. 21, 22, 46, inc. 1, y de las normas pertinentes del dec. 717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias.”

No cabe duda que las normas que regulan el procedimiento por ante las comisiones médicas son incompatibles con el principio del debido proceso y como lo destaca el fallo citado con el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -norma de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.)- por la cual “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones. El derecho a ser oído con justicia sólo puede ser garantizado por personas que hayan prestado juramento de respetar la legalidad constitucional e infraconstitucional, condición que no reúnen los médicos, quienes sólo están obligados por el juramento hipocrático.”

Por lo expresado cabe declarar también la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 Ley 24557 y del Dec. 717/96 y 491/97 formulado por la actora- Así lo declaro.

e) Por los fundamentos expuestos precedentemente y siendo que esta Vocalía ha oído el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, el que se comparte en cuanto aconseja admitir los planteos de inconstitucionalidad de los Arts. 1, 8, 21, 22, 39 y Decretos que se tachan de inconstitucionales por la actora, corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas en el escrito de demanda.- Asimismo respecto de la inconstitucionalidad del Art. 46 LRT, la misma fue resuelta a fs. 93 por sentencia firme.- Así se declara.

#### **IV. La excepción de Falta de Acción.**

La parte demandada opone defensa de falta de acción por falta de legitimación activa-pasiva con fundamento en que la accionada no es pasible de ser responsable civilmente porque no reúne ninguno de los requisitos facticos para quedar aprehendida bajo esa órbita. Añade que las ART solo pueden amparar aquellas contingencias emergente de la Ley 24.557, conforme el contrato suscripto

entre la aseguradora y la empleadora, no siendo aplicables las normas civiles referidas en la demanda al infortunio sufrido por la actora. Indica que la ART otorgó la cobertura prevista en la Ley 24.557 a la actora, sin que posea sustento legal la acción de la actora, ya que excede las previsiones de la citada norma, solicitando el rechazo de la pretensión de la demanda de involucrar a la ART en una reparación integral basada en normas del derecho común.

La parte actora solicita el rechazo de la excepción opuesta por la demandada (fs. 206/207), por considerar que la ART es responsable civilmente en virtud del Art. 4 de la Ley 24.557 y los Arts. 1074 y 512 del CC. Cita lo expresado por la CSJN en los autos “Torillo Atilio Amadeo c/ Gulf Oil Argentina SA y otro s/ daños y perjuicios” (sentencia del 31/03/2009).

En primer término, cabe destacar que, con criterio general, la defensa en análisis refiere a la inexistencia de título o derecho del actor a litigar o a la ausencia de calidad de deudor o sujeto pasivo de reclamo, atribuida al demandado y son de interpretación restrictiva por aplicación de los principios constitucionales de defensa en juicio y acceso a la justicia (Falcón “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 271)”, (cfr. Excma. Cámara del Trabajo Tucumán, Sala I, *Conde Rosa c/ Ortiz Manuel y otra s/ cobro de pesos*, 27/09/13). En su faz activa, es procedente si el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir aquellas calidades con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. (CSJT *in re: Sucesión de Brizuela Santiago M. c/ Brito Víctor Hugo y/u otro s/ daños y perjuicios*” 22/10/1999, sentencia n° 815).

En esa inteligencia, encontrándose documentadamente acreditada la vinculación jurídica que existió entre las partes en el marco de la Ley 24557, y habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de esa ley, los argumentos esgrimidos en sustento de la excepción deducida no resultan atendibles, máxime considerando que la parte actora invocó aceptación del siniestro denunciado en sustento de la demanda y que la demandada no ha desconocido el accidente de trabajo.

Por ello la excepción de falta de legitimación activa y pasiva no puede prosperar. Así lo declaro

## **V. La responsabilidad civil de Provincia ART SA**

Declarada la inconstitucionalidad del art. 39 ley 24.557 y resultando por tanto receptada favorablemente la cuestión referida a la posibilidad de los trabajadores de reclamar la indemnización del derecho civil en caso de accidente de trabajo, cabe referirse a la normativa aplicable en el supuesto de autos en que se ha reclamado precisamente la indemnización prevista en el derecho civil comprensiva de daño moral, daño material, pérdida de chance y lucro cesante invocando el actor en forma expresa la aplicación de las normas del derecho civil.

Se ha dicho que: “El tribunal de alzada ha fallado correctamente en tanto, del ejercicio de la acción civil y de su sostenimiento jurídico en los arts. 1109 y 1113 del CC, surge la exigencia de la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. La elección de la presente vía procesal implica que ella se rija -tanto en lo sustancial como en lo formal- por los principios del derecho civil (CSJT, Ruiz Juan Dionisio vs. OROI S.A s/ Daños y Perjuicios, 22.08.05, sent. 709)”.

Es que si bien la responsabilidad de la ART no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, también es cierto que ello lo será siempre y cuando ella no incurra en un comportamiento dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el mencionado ex Código Civil (arts. 1073, 1074 y 1109), con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad: ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal.

De allí que no luzca legítima la limitación a la responsabilidad invocada por la aseguradora demandada al pretender eximirse de toda obligación derivada del derecho común a través de la

existencia de un contrato entre ella y la empleadora y por considerarlo inoponible al actor, y por lo que corresponde el rechazo de su defensa en tal sentido ya que esta ART resulta legitimada para ser demandada en autos, como ya lo anticipara al tratar la falta de acción. Así lo declaro.

Clara la normativa aplicable y acreditada la existencia del siniestro ocurrido el día 07 de marzo de 2008 mientras la actora se desempeñaba en su lugar de trabajo y en ocasión de sus funciones, que le generó una incapacidad parcial y permanente según los dos dictámenes médicos agregados en autos -no cuestionados por las partes y que difieren levemente en el porcentaje establecido- , cabe entonces determinar primero cual es el porcentaje de incapacidad que padece la actora.

La pericia medica previa del Dr. Adrian Cunio, concluye un porcentual actual (año 2011) del 4,9% por padecer secuelas de traumatismo de rodilla izquierda. Y luego el dictamen médico del Dr. Sebastian Area coincide en la patología y determina un 5,4%.

En conclusión tanto ambos dictámenes médicos producidos en autos (Dres Area y Cunio), se encuentran firmes, por lo que merecen su valoración objetiva para el caso.

Así, valorado el contenido técnico y teórico, así como que la diferencia entre ambos sea provocada por la posible evolución de la incapacidad determinada desde el siniestro (marzo 2008), la pericia medica previa referida (año 2011) y el dictamen posterior de agosto de 2015 (469/470), sin que se adviertan otras patologías que la que viene refiriéndose, me inclino por considerar el dictamen del Dr. Area por ser la más cercana en el tiempo esto es **una incapacidad parcial y permanente del 5,40%** aplicando los factores de ponderación y conforme la Ley 24557 y Dec. Regl. 659/96 por secuela de traumatismo de rodilla izquierda.- Así lo considero.

3. Determinado ello, debe dilucidarse que responsabilidad cabía a la demandada (ART) por el hecho dañoso, y si ésta efectuó capacitación, perfeccionamiento y/o instrucciones para la prevención de riesgos laborales, mediante actividades permanentes y controles de las condiciones y medio ambiente de trabajo, mientras la trabajadora prestaba servicios para Universidad Nacional de Tucumán (Facultad de Artes) como ordenanza.

3.1. Del análisis de la normativa civil en materia de daños, cabe destacar que la actora no aportó medios probatorios tendientes a acreditar de manera fehaciente y no meramente narrativa sobre las condiciones denunciadas en la demanda relativas al espacio donde se acaeció el siniestro sufrido, ni aporta mínimamente datos concretos (vgr. planos, fotografías, inspección ocular, peritaje, entre otros) que permitan brindar las constancias a fin de persuadir a esta sentenciante sobre la calidad o condiciones de cosas o lugares de las instalaciones de la Escuela de Arte de la UNT, a fin de emitir un pronunciamiento ajustado a la verdad de hechos respecto a la pertinencia o impertinencia, admisibilidad o inadmisibilidad de la pretensión esgrimida por la actora.

3.2 Del plexo probatorio expuesto, principalmente de las pruebas informativas del actor y del demandado, cuya manda judicial ordena que se intime a las mismas a la exhibición de documentación, surge que la demandada y la empleadora han aportado éstos con la diligencia adecuada para liberarse de la responsabilidad civil que proyecte la obligación de resarcir los daños sufridos por la actora.

3.3. Declarado lo anterior, y respecto de la responsabilidad civil imputada por la actora a la demandada PROVINCIA ART SA, cabe recordar que conforme lo dispuesto por el ordenamiento procesal vigente (art. 302 del CPCyC supletorio), la carga probatoria de las omisiones o cumplimientos deficientes imputados a la ART demandada se encontraba en cabeza de la actora por ser quien afirmaba la existencia de un hecho controvertido.

Pues bien, del relato de la actora expuesto en su demanda no surge con claridad cuáles son los imputados incumplimientos de la ART codemandada ni explicitado de modo concreto el nexo de causalidad entre ellos y el daño producido a la actora, limitándose a efectuar genéricas afirmaciones respecto de la responsabilidad de las ART más allá de las previstas en la ley 24557.

A su vez, de autos no surge que la actora hubiere producido prueba alguna que lograra acreditar los supuestos exigidos por la normativa legal aplicable con relación a la imputación de responsabilidad de la ART codemandada, es decir, la relación causal adecuada entre la supuesta omisión o cumplimiento deficiente de las obligaciones legales que la ley 24.557 y sus normas reglamentarias y complementarias le imponen a las ART y los daños padecidos por la actora, y subsumiéndosela así en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el mencionado ex Código Civil (arts. 1073, 1074 y 1109), con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad: ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal.

Destaco el precedente jurisprudencial en el que se sostuvo que “No cabe perder de vista que el daño normalmente es generado por el empleador, pero es posible que la acción esperada por la ART hubiera evitado o disminuido el mismo sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal. De esta forma, lo que se debe analizar en cada caso concreto, es si la omisión de la ART respecto de los deberes que le fueron impuestos, fue una condición adecuada para que el daño se produzca” (CSJT, autos “Juárez Graciela vs. Carrazana Cirilo s/indem. por fallec., sent. del 17.06.09).

Entonces, si bien la ART aseguradora tiene la facultad/deber de impartir directivas generales en orden a la prevención de los siniestros e indicar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales y controlar su acatamiento, se la puede considerar exenta de un control cotidiano respecto del desarrollo del trabajo en sí y del desempeño particular de cada uno de los empleados.

De allí que la actora debió invocar y probar qué pudo hacer concretamente la aseguradora para evitar el accidente o disminuir sus consecuencias dañosas y no lo hizo.

Es decir, que la actora en autos no ha probado que exista un nexo de causalidad adecuada entre los invocados incumplimientos de la ART a sus obligaciones de control y el daño padecido por ella.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la demanda deducida por LUISA ISABEL FIGUEROA contra PROVINCIA ART SA, a quien se absuelve de los rubros y montos reclamados (daño material y moral, lucro cesante y pérdida de chance).- Así lo considero.

## **VI. Rubros e importes reclamados**

Atento lo resuelto precedentemente deviene abstracto su tratamiento y consideración. Así lo considero.

## **VII. Intereses, costas, honorarios.**

**Intereses:** En cuanto a la tasa aplicable para computar los intereses -a los fines de la determinación de la base regulatoria para los honorarios- se aplica el método de la tasa activa del BNA, atento la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” conforme la cuál el Alto Tribunal ratifica la decisión de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, N° 324 del 15/04/2015, entre otras), y expresa que los jueces deben dictar

pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago" (Dres. Gandur -dis. parcial - Goane - dis. parcial - Sbdar - Posse - Pedernera). En su mérito y en base a lo dispuesto por el art. 767 y ccdantes del Código Civil y Comercial de la Nación esta vocalía considera que deviene razonable la aplicación de dicha tasa de interés. Así lo declaro.

**Costas:** Nuestra Corte ya destacó en anteriores pronunciamientos que "la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (cfr. Arazi Roland y Fenochietto Carlos E., Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, pág. 120)" (cfr. CSJT, sentencia N° 415 de fecha 07/6/2002, "López, Domingo Gabriel vs. Nacul Uadi s/ Salarios impagos y otros"; sentencia N° 981 de fecha 20/11/2000, "Reyna, Julio Andrés vs. Ingeco S.A.C. s/ Indemnización por accidente de trabajo"; sentencia N° 687 de fecha 07/9/1998, "Fernández, Ramón Alberto vs. Bagley S.A. s/ Cobros"; entre otras); así como que la distribución de las costas del proceso deben guardar correspondencia con el resultado del pleito (cfr. CSJT, sentencia N° 37 de fecha 11/02/2005, "Díaz, Emilio Eduardo vs. Morano, Otmar Alfredo y otro s/ Cobros").

En este sentido la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en sentencia n° 1823 de fecha 29 de Noviembre de 2018 (in re: "ARGAÑARAZ JUAN MANUEL VS. PACO GARCIA S.A. S/ COBRO DE PESOS. X- INSTANCIA UNICA CON BLOQUEO DE SALA". EXPTE. 2306/11) ha dicho que: *"En efecto, de acuerdo a nuestro régimen procesal la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas, aunque no mediara petición expresa, salvo en los casos que prevé la misma norma, que deberán fundarse, bajo pena de nulidad (artículo 105, CPCyC, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 del CPL). Entre tales casos, enumera, en su inciso 1, "Cuando el juez considere que hay mérito para eximirla total o parcialmente de ellas". Siendo ello así, la decisión que pretenda apartarse de la aplicación del principio objetivo de la derrota y encuadrar el caso en alguna de las excepciones contenidas en la ley adjetiva, requiere una motivación particular, bajo pena de nulidad" Aún admitiendo el amplio margen de deferencia tradicionalmente concedido a los jueces de mérito para analizar la medida de progreso y rechazo de los diversos planteos formulados por las partes a la hora de imponer las costas, lo cierto es que tal distribución debe reflejar adecuadamente el resultado del juicio y el efectivo alcance del progreso o rechazo de las peticiones formuladas por las partes; y debe encontrarse debidamente fundada"*

Por lo dicho la valoración judicial en materia de las COSTAS, debe obedecer tanto a criterios cualitativos como cuantitativos y valorar asimismo según las constancias de la causa y ante la existencia de vencimientos parciales o totales, la razón probable del litigante en casos como el presente donde la demanda es rechazada, si bien se admiten planteos de la actora de inconstitucionalidad que habilitan el tratamiento de la cuestión de fondo y se rechaza la falta de acción que opusiera la demandada como defensa principal.

En ese razonamiento no puedo perder de vista que el accidente laboral ocurrió, que la ART era la aseguradora del empleador (UNT) y que la actora reclama por lo que considera no recibió una atención adecuada de los profesionales y prestadores de la ART a sus patologías, ocasionándole daños y perjuicios que reclamó a través de esta acción. Mas allá de lo decidido, entiendo que la actora pudo tener una razón fundada para creer que le asistía el derecho de efectuar estos reclamos, considerando este concepto de *razón para litigar* no como una mera apreciación subjetiva sino también con el apoyo de los elementos objetivos que emanan de esta causa y que he señalado, así como el tiempo transcurrido hasta esta resolución sobre el fondo del reclamo y la naturaleza compleja de las acciones civiles en el campo del derecho del trabajo, considero razonable imponer las costas por el orden causado (art. 105 inc. 1 CPCyC supletorio). Así lo considero.

**Honorarios:** Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la ley N° 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso “b” de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto reclamado en la demanda, debidamente corregido con la tasa pasiva de interés que fija el Banco Central de la República Argentina y reducido al 30%, lo que arroja el siguiente resultado:

Importe de la demanda al 20/11/2009 \$290.351,54

Interés tasa activa BNRA al 30/09/22

$290.351,54 \times 395,08\% = \$1.147.118,06$

Total demanda reexp. Al 30/09/2022 = \$1.437.469,60

- Artículo 50 inc. “b” ley N° 6.204

$\$1.437.469,60 \times 30\% = \$431.240,88$

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42 y concordantes de la ley N° 5.480, se regulan los siguientes honorarios:

1) A la letrada Noelia Griselda MEDINA NUÑEZ por su actuación en el doble carácter por la actora en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de \$80.210,80 (base x 12 más el 55% por el doble carácter); y por las reservas hechas a fs. 264, 402/403, 485, 513, 527 y 354 la suma de \$8.021 por cada una de ellas (10% de la escala porcentual del Art. 59 de la ley arancelaria).

2) A la letrada Silvia Marcela MENEGHELLO por su actuación en el doble carácter por la accionada en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de \$93.579,20 (base x 14% más el 55% por el doble carácter); por las reservas hechas a fs. 264, 485, 513, 354, 402/403 y 527 en la suma de \$9.358 por cada una de ellas (10% de la escala porcentual del Art. 59 de la ley arancelaria).

3) A la perito psicóloga Lic. María Edith MARTÍNEZ por el informe pericial rendido en autos la suma de \$8.625,80 (2% de la escala porcentual del Art. 51 del CPL). ES MI VOTO.

#### **VOTO DE LA VOCAL CONFORMANTE MARCELA B. TEJEDA:**

Por compartir con los fundamentos dados por la Vocal Preopinante, se vota en igual e idéntico sentido. ES MI VOTO.

Por lo considerado y demás tratado, esta Excma. Cámara del Trabajo, Sala la. integrada a tal fin,

#### **RESUELVE:**

**I) ADMITIR** el planteo de inconstitucionalidad de los Arts. 1, 8, 21, 22 y 39 inciso 1 LRT, y Decretos 717/96 y 491/97, deducidos por la actora, atento lo considerado.

**II) RECHAZAR** la defensa de falta de legitimación activa y pasiva deducida por la demandada, por lo considerado.

**III) RECHAZAR** la demanda iniciada por LUISA ISABEL FIGUEROA, argentina, mayor de edad, casada, DNI N° 12.247.778, con domicilio en calle Corrientes, Mz. F, lote 18, del B° Aeropuerto de esta ciudad en contra de PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA y en consecuencia ABSOLVER a esta por los rubros y montos reclamados en su contra, atento lo considerado.

**IV) COSTAS:** por el orden causado según se considera.

**V) REGULAR HONORARIOS** por el proceso de conocimiento a los letrados: 1) Noelia Griselda MEDINA NUÑEZ en la suma de \$80.210,80 (pesos: ochenta mil doscientos diez con ochenta ctvs.; y

2) Silvia Marcela MENEGHELLO en la suma de \$93.579,20 (pesos: noventa y tres mil quinientos setenta y nueve con veinte ctvos.).

**VI) REGULAR HONORARIOS** 1) a la letrada Noelia Grisel Medina Núñez por las incidencias resueltas a fs. 264, 402/403, 485, 513, 527 y 354 la suma de \$8.021 por cada una de ellas (pesos: ocho mil veintiuno); y 2) A la letrada Silvia Marcela MENEGHELLO por las reservas hechas a fs. 264, 485, 513, 354, 402/403 y 527 en la suma de \$9.358 por cada una de ellas (pesos: nueve mil trescientos cincuenta y ocho).

**VII) REGULAR HONORARIOS** a la Perito Psicóloga Lic. María Edith MARTÍNEZ por el informe pericial rendido en autos la suma de \$8.625,80 (pesos: ocho mil seiscientos veinticinco con ochenta ctvos.).

**VIII) PLANILLA FISCAL**, practíquese oportunamente.

**HAGASE SABER.**

**MARIA del CARMEN DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ TEJEDA**

**(Vocales, con sus firmas digitales)**

**ANTE MI: RICARDO C. PONCE DE LEON**

**(Secretario, con su firma digital)**

NRO. SENT.: 178 - FECHA SENT.: 06/10/2022

Firmado digitalmente por:  
CN=PONCE DE LEON Ricardo Cesar  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20213291492  
FECHA FIRMA=06/10/2022  
CN=TEJEDA Marcela Beatriz De Fátima  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 27127332253  
FECHA FIRMA=06/10/2022  
CN=DOMÍNGUEZ María Del Carmen  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 27213290369  
FECHA FIRMA=06/10/2022

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.